

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente.

Apelación – Auto	
DEMANDANTE	GLORIA HELENA CÁRDENAS AMAYA
DEMANDADO	AFP PORVENIR S.A.
RADICADO	05001-31-05-021-2011-00131-02.
TEMAS	Graduación de las costas
DECISIÓN	Modifica el valor fijado

Medellín, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **GLORIA HELENA CÁRDENAS AMAYA** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 054**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

A N T E C E D E N T E S

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de esta ciudad el día 19 de agosto de 2022, el cual liquidó e impartió aprobación a la liquidación secretarial de costas procesales impuestas en la respectiva instancia.

Al respecto, debe recordarse que la señora GLORIA HELENA CÁRDENAS AMAYA, impetró acción judicial solicitando el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en calidad de beneficiaria de su hijo fallecido ALEJANDRO ESTEBAN YEPES CÁRDENAS, junto con los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, y las costas del proceso.

En sentencia del 30 de abril de 2014, el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, CONDENÓ a la AFP PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la señora CÁRDENAS AMAYA la pensión de sobrevivientes deprecada, y a título de retroactivo pensional dispuso el pago de \$35.346.800, que comprende las mesadas causadas entre el 3 de octubre de 2009 y el 30 de abril de 2014.

De otro lado, CONDENÓ a la AFP PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la señora CÁRDENAS AMAYA, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, ordenando su liquidación a partir del 14 de octubre de 2012.

Finalmente impuso las costas del proceso a cargo de la AFP PORVENIR S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$2.464.000.

La sentencia de primera instancia fue conocida por la Sala Segunda Dual de Descongestión adscrita a este Tribunal de Distrito Judicial, en apelación presentada por los apoderados judiciales de ambas partes, habiéndose proferido sentencia de segunda instancia el día 29 de mayo de 2015, mediante la cual se confirmó la sentencia de primer grado en cuanto el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y los intereses moratorios, pero se modificó el extremo inicial de liquidación de estos intereses, los cuales deberán calcularse a partir del 1° de marzo de 2010.

Las costas del proceso en la segunda instancia quedaron a cargo de la AFP PORVENIR S.A., y a favor de la demandante, fijándose como agencias en derecho la suma de \$322.175.

La sentencia de segunda instancia fue objeto del recurso extraordinario de casación ante la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, quien mediante providencias SL3537-2020 (anulada por la sentencia de tutela STC6514-2021), SL3474-2021 (mediante la cual se decretó prueba de oficio) SL1386-2022 (reemplazo la sentencia inicial SL3537-2020), decidió CASAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2015, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en cuanto confirmó la decisión de primer grado relativa al cumplimiento de las semanas de cotizaciones que el ordenamiento jurídico prevé para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Y luego de decretar una prueba oficiosa, decidió CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia que profirió el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión de Medellín, el 30 de abril de 2014, que ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante y, actualizar el monto del retroactivo pensional a la fecha en suma de \$122.014.582, que deberá pagar la AFP Porvenir

SA, y continuar con dicha obligación en suma de un salario mínimo legal mensual vigente, junto con las mesadas adicionales debidamente reajustadas.

MODIFICÓ el numeral segundo de la sentencia apelada, en el sentido de condenar a la AFP Porvenir SA, a pagar a favor de Gloria Helena Cárdenas Amaya, los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de marzo de 2010 hasta el momento en que se efectúe el pago. Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.

Se abstuvo de imponer costas procesales en el recurso extraordinario, no obstante, impuso esta condena en las instancias a cargo de la AFP PORVENIR S.A., y en favor de la demandante.

En cumplimiento a lo resuelto por el superior, este Tribunal de Distrito Judicial mediante auto del 7 de julio de 2022, fijó las agencias en derecho en la segunda instancia, en la suma de \$644.350 equivalente a un (1) SMLMV para el año 2015.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA

Una vez surtido el recurso extraordinario, y devuelto el expediente al juzgado de origen, el *A Quo* mediante auto del 19 de agosto de 2022, ordenó que a través de trámite secretarial se liquidaran las costas procesales, por las siguientes sumas:

- AGENCIAS EN DERECHO en 1ª Instancia a cargo de la AFP PORVENIR S.A., y a favor de la parte demandante la suma de **\$2.464.000.**
- AGENCIAS EN DERECHO en 2ª instancia a cargo de la AFP PORVENIR S.A., y a favor de la parte demandante la suma de \$644.000.

TOTAL, COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO-----\$3.108.350.

En providencia de la misma fecha, se le impartió aprobación a dicha liquidación por parte del A Quo.

La apoderada judicial de la parte demandante **recurrió en reposición y apelación** el valor liquidado por concepto de costas procesales.

El *A Quo*, mediante auto del 13 de septiembre de 2022, accedió parcialmente al aumento solicitado, llevando la condena por agencias en derecho en la primera instancia a la suma de \$4.928.000, equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la anualidad 2014, en que se profirió la sentencia de primera instancia.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Sustentó su inconformismo con la tasación de costas procesales, argumentando que debe aumentarse el valor fijado por concepto de agencias en derecho en la primera instancia, pues en su sentir no tiene sentido que se calculen las agencias en derecho en la suma de \$2.464.000.00, considerando que debe haber previa ponderación de los factores y circunstancias relevantes, obedeciendo a los criterios determinados por el artículo 3° del Acuerdo el 1887 de 2003, así como la naturaleza del pleito, la duración del proceso y la calidad y diligencia de la gestión profesional en el desarrollo de la actuación.

Expuso también la recurrente que debe tenerse en cuenta la condena impuesta por obligación de Dar y se de aplicación a las disposiciones antes señaladas, atendiendo a la jurisprudencia del de este mismo Tribunal y adicional a eso, se considere la duración del proceso y la calidad de la representación, en consecuencia, se

modifique la liquidación de agencias en derecho ajustándola a la realidad procesal.

Alegatos de conclusión

No se presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas de un proceso corren a cargo de *“...la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto...”*.

Dicha disposición consagra un criterio objetivo que busca que las costas del proceso sean cubiertas por quien pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez se decida la litis.

Las costas del proceso comprenden, de un lado, los gastos judiciales que haya hecho la parte beneficiada con la condena y que aparezcan comprobados en el expediente y del otro, las agencias en derecho, en las que, para su fijación por el juez *“deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...”* (Artículo 366, numeral 4º del CGP).

De otro lado, el Acuerdo 1887 de 2003, modificado por el 2222 de diciembre 10 de 2003, emanado de la Sala Administrativa del

Consejo Superior de la Judicatura, establece como criterios para la fijación de tales emolumentos:

“ART. 3°— Criterios. *El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.*

PAR.- En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia”

Seguidamente, en lo que toca con la tasación de las agencias en materia laboral, el mencionado acuerdo prescribe:

“2.1.1 A favor del trabajador:

Única instancia (...)

Primera instancia: *Hasta el 25% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si está, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(...).

PARÁGRAFO. Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
(Negrillas de la Sala)

CASO CONCRETO

Vigencia de las normas reguladoras de la tasación de agencias en derecho en el Sub lite:

En el presente caso resulta aplicable la regulación establecida en el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –referido en precedencia-, y no la del

Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto 2016, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una demanda presentada el 2 de febrero de 2011.

También destaca la Sala que, al tratarse de un proceso ordinario laboral de doble instancia, y resultar la sentencia de primer grado desfavorable para los intereses de la AFP PORVENIR S.A., quien salió condenada al pago de una pensión de sobrevivientes e intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, el parágrafo numeral 2.1.1 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, establece con absoluta claridad que las agencias en derecho en primera instancia tratándose de procesos donde se reconocen prestaciones periódicas, podrán tasarse hasta en veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Y en el presente asunto la condena por AGENCIAS EN DERECHO en la primera instancia (\$4.928.000) corresponde efectivamente a la suma de 8 SMLMV para la anualidad 2014 en que se profirió la sentencia de primer grado (\$616.000 x 8 = \$4.928.000), por lo que en principio podría inferirse que el valor fijado por el *A Quo*, se encuentra dentro de los topes a los que indica el numeral 2.1.1 del referido acuerdo.

No obstante, la tasación de las agencias en derecho se hizo por menos de la mitad de la tarifa establecida en el parágrafo, desconociendo la duración extraordinaria del proceso, el cual se recuerda, inició el 2 de febrero de 2011 (fecha de radicación de la demanda ante la oficina de apoyo judicial de Medellín), y culminó con la sentencia del 27 de abril de 2022 (SL1386-2022) proferida por la Sala de Descongestión N° 3 adscrita a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es decir, más de 11 años de trámite judicial, que no se ven recompensados con una condena en costas procesales cuyas agencias en derecho se tasaron por menos de la mitad de la tarifa permitida.

Y si bien la problemática abordada en las instancias y el recurso extraordinario no revestía mayor complejidad (pensión de sobrevivientes e intereses moratorios), no puede perderse de vista que la parte demandante debió valerse de una acción de tutela (CSJ STC6514-2021) para lograr revertir una sentencia inicialmente desfavorable en casación (SL3537-2020), logrando con ello que se expidiera una nueva sentencia en recurso extraordinario de casación en la que se logró conservar el anhelado derecho pensional.

La formulación de esa acción constitucional de tutela, fue un trámite adicional que debió asumir la parte demandante, estimando la Sala que ese desgaste extra procesal también debe verse resarcido con una tasación superior en lo relativo a las agencias en derecho en la primera instancia, y más aún, si se tiene en cuenta que en el recurso extraordinario de casación no se impusieron costas procesales a cargo de la AFP PORVENIR S.A.

Circunstancias que al ser analizadas bajo los criterios del art. 3° del Acuerdo 1887 de 2003, daba lugar a la imposición de un monto más elevado por concepto de agencias en derecho, y por ello la Sala accederá a lo solicitado por la recurrente, modificando la condena en este sentido a la suma de **SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/L (\$6.160.000)**, equivalente a 10 SMLMV para la anualidad 2014.

Sin COSTAS en esta actuación.

D E C I S I Ó N

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL,**

R E S U E L V E:

Primero. MODIFICAR la providencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, en el sentido de aumentar el valor de las

costas y agencias en derecho en la primera instancia, la cual quedará en la suma de **SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/L (\$6.160.000)**, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin Costas en esta instancia.

Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto, y devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **228** del **19** de **diciembre** de **2022**.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>